JUICIO DE INCONFORMIDAD Y JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: JI-32/2021 Y SUS ACUMULADOS

PROMOVENTES: MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ PLATAS Y OTROS

RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL DE NUEVO LEÓN

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA DE LA GARZA RAMOS

SECRETARIA: SANDRA ISABEL GASPAR GARCÍA

Monterrey, Nuevo León, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno.

Sentencia definitiva que: **a) revoca**, en lo que fue materia de impugnación, el Acuerdo CEE/CG/102/2021, en lo relativo al debate de diputaciones locales; al determinarse que el artículo 153, párrafo segundo de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, en la porción normativa impugnada, así como los artículos 5 y 8, de los Lineamientos de Debates, en la porción normativa impugnada, no son constitucionales y, por tanto, se declara su inaplicación al caso concreto; y **b) sobresee** los juicios de la ciudadanía JDC-125/2021 y JDC-126/2021; al estimarse que esos medios de impugnación quedaron sin materia.

GLOSARIO

Parte Actora o Promoventes	Mario Alberto Rodríguez Platas, Jessica Elodia Martínez Martínez y Daniel Darío Pérez Cavazos.
Autoridad Responsable o Comisión Electoral. Tribunal	Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León.
CEE/CG/102/2021 o Acuerdo Impugnado	Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, relativo a la emisión de los Lineamientos para la Organización de debates durante el Proceso Electoral 2020-2021.
Suprema Corte Sala Superior	Suprema Corte de Justicia de la Nación Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Constitución Federal	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Local	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León

Ley Electoral	Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.
Lineamientos de Debates	Lineamientos para la Organización de Debates durante el Proceso Electoral 2020-2021.
LGBTTIQ+	Personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis, intersexuales y queer.

R E S U L T A N D O:

1. ANTECEDENTES.¹ De las constancias que integran el expediente se desprenden los siguientes hechos:

1.1. Acuerdo CEE/CG/040/2021. El dos de marzo, la *Comisión Electoral* emitió el Acuerdo por el que aprobó el registro de Roberto Alviso Marques como candidato independiente propietario al sexto distrito electoral en el Estado de Nuevo León.

1.2. Acuerdo CEE/CG/041/2021. En la fecha citada en el numeral que antecede, la *Autoridad Responsable* aprobó el registro de Daniel Darío Pérez Cavazos como candidato independiente propietario para el décimo segundo distrito electoral en el Estado de Nuevo León.

1.3. Acuerdo CEE/CG/058/2021. El cuatro de marzo, la *Comisión Electoral* aprobó el registro de Kristian Andrés Macías Fernández, como candidato independiente propietario para el cuarto distrito electoral en el Estado de Nuevo León.

1.4. Acuerdo CEE/CG/062/2021. El seis siguiente, la *Autoridad Responsable* aprobó el registro de candidaturas, presentadas por la Coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, entre ellas la de Mario Alberto Rodríguez Platas.

1.5. Acuerdo CEE/CG/094/2021. El veintidós del mismo mes, la *Comisión Electoral* aprobó el registro de candidaturas, presentadas por Morena, entre ellas la de Jessica Elodia Martínez Martínez.

1.6. Acuerdo CEE/CG/102/2021. El veintiséis de marzo, la *Comisión Electoral*

¹ Las fechas que se citan corresponden al año dos mil veintiuno, salvo precisión en contrario.

aprobó el acuerdo relativo a la emisión de los *Lineamientos de Debates*.

1.7. Presentación de las demandas. Inconformes con los *Lineamientos de Debate*, se presentaron las siguientes demandas:

FECHA	JUICIO	PROMOVENTE
29 de marzo	JI-32/2021	Mario Alberto Rodríguez Platas
30 de marzo	JI-33/2021	Jessica Elodia Martínez Martínez
31 de marzo	JDC-125/2021	Kristian Andrés Macías Fernández
31 de marzo	JDC-126/2021	Roberto Alviso Marqués
31 de marzo	JDC-127/2021	Daniel Darío Pérez Cavazos

1.8. Admisión y fecha de audiencia de los juicios de inconformidad. Los días uno y dos de abril, la Magistrada Presidenta admitió los juicios de inconformidad JI-32/2021 y JI-33/2021 y fijó las once horas con treinta minutos de los días siete y ocho siguientes, para la celebración de la audiencia de Ley.

1.9. Informes previos de los juicios de inconformidad y acuerdos de radicación de los juicios de la ciudadanía. El tres de abril, fueron recibidos en el *Tribunal* los informes previos y sus anexos relativos a los juicios de inconformidad.

El mismo día, fueron radicados los juicios de la ciudadanía JDC-125/2021, JDC-126/2021 y JDC-127/2021.

1.10. Informes justificados. El cinco del mismo mes, fueron recibidas en la oficialía de partes del *Tribunal*, las constancias relativas a los informes justificados de los juicios de inconformidad.

1.11. Recepción de informes circunstanciados de los juicios de la ciudadanía y celebración de las audiencias de Ley en los juicios de inconformidad. El siete de abril fueron recibidos los informes circunstanciados de los juicios de la ciudadanía, remitidos por la *Autoridad Responsable*.

Asimismo, los días siete y ocho siguientes, tuvieron verificativo las audiencias a que refiere el artículo 305 de la *Ley Electoral*.

1.12. Admisión de los juicios de la ciudadanía. El diez de abril, la Magistrada Presidente admitió los juicios de la ciudadanía JDC-125/2021, JDC-126/2021 y JDC-127/2021.

1.13. Acumulación. El día siguiente, la Presidencia del *Tribunal* ordenó que los autos de los expedientes identificados con las claves JI-33/2021, JDC-125/2021, JDC-126/2021 y JDC-127/2021, fueran acumulados al expediente JDC-31/2021.

1.14. Admisión de pruebas y cierre de instrucción del JDC-127/2021. El diecinueve de abril, la Magistrada Instructora admitió las pruebas ofrecidas por el actor en el juicio de la ciudadanía citado y cerró la instrucción.

C O N S I D E R A N D O:

2. COMPETENCIA

El *Tribunal* es competente para conocer y resolver los medios de impugnación pues se trata de juicios de inconformidad y juicios de la ciudadanía promovidos por las candidaturas de partidos políticos y candidatos independientes, en los que controvierten un acuerdo de la *Comisión Electoral*, así como diversos artículos de los *Lineamientos de Debates*.

Lo anterior con fundamento en los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso I) de la *Constitución Federal*; 44 y 45, primer párrafo, de la *Constitución Local*; y, 1, fracción I; 85, fracción II; 276 y 291 de la *Ley Electoral Local*; así como en las normas especiales para la tramitación del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.²

3. SOBRESEIMIENTO DE LOS JUICIOS DE LA CIUDADANÍA JDC-125/2021 y JDC-126/2021.

De conformidad con lo establecido por la *Sala Superior*³ procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin

² Directrices aprobadas por el Pleno de este órgano jurisdiccional mediante acta de sesión extraordinaria celebrada el día diez de noviembre de dos mil catorce. Consultable en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, publicado el diecisiete de ese mes y año.

³ Véase la Jurisprudencia 34/2002 de rubro: IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 38..

materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia.

De esta forma, la causa de improcedencia se compone, de dos elementos:

- a) Que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque.
- b) Que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo este elemento es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial;

Así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja **de existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia** y, por tanto, ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el dictado de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una decisión de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después.

En el caso, de los juicios promovidos por Kristian Andrés Macías Fernández y Roberto Alviso Marques, se advierte que esencialmente combaten el sorteo llevado a cabo por la *Comisión Electoral* y alegan que designó a un candidato independiente para participar en un debate obligatorio con candidatos que no corresponden al distrito en el que contienden, lo cual, en su opinión, es indebido, pues consideran que dicho acto genera inequidad en la contienda y violenta el principio de certeza.

En este sentido, resulta necesario señalar que través de los informes circunstanciados rendidos por la *Autoridad Responsable*, mediante los oficios DJ/CEE/561/2021 y DJ/CEE/562/2021 se advierte que el sorteo del cual se agravian los actores, se realizó el pasado primero de abril, en donde resultó designado Daniel Darío Pérez Cavazos, candidato independiente por el Décimo Segundo Distrito Electoral.

Lo cual, se acredita, con la copia certificada de los oficios CEE/SE/0924/2021 y CEE/SE/0926/2021, ambos fechados el dos de abril, mediante los cuales se hizo del conocimiento a Kristian Andrés Macías Fernández y Roberto Alviso Marques, de tal acto.

Ante estos hechos, es posible advertir que, si los promoventes no resultaron sorteados, se encuentra colmada su pretensión, pues de acuerdo a lo establecido en los *Lineamientos de Debate*, el resto de las candidaturas independientes que no resulten designadas para participar en el debate obligatorio, debatirán en sus distritos con candidaturas postuladas en los mismos distritos y, en el caso, derivado del sorteo, tanto Kristian Andrés Macías Fernández como Roberto Alviso Marques, debatirán con candidaturas de sus respectivos distritos.

De esta manera, si la pretensión de los actores, consiste en que se elimine la posibilidad de debatir con candidatos de otros distritos, al haberse colmado tal pretensión, al no existir un agravio que lesione sus derechos.

Consecuentemente, toda vez que las demandas de los juicios ya fueron admitidas, lo conducente es sobreseer los juicios ciudadanos señalados, toda vez que han quedado sin materia.

4. PROCEDENCIA

4.1. Procedencia de los juicios de inconformidad JI-31/2021 y JI-33/2021 y del juicio de la ciudadanía JDC-127/2021.

Los juicios cumplen los requisitos de procedencia, previstos en el artículo 297, de la *Ley Electoral* y en las normas especiales para la tramitación del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, como se demuestra a continuación:

a). Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante el *Tribunal*, en ellas consta el nombre de quienes promueven, sus firmas autógrafas, se identifica el acto impugnado, se mencionan hechos y agravios, además de los artículos presuntamente violados.

b). Oportunidad. Se cumple este requisito, ya que los medios de impugnación fueron promovidos dentro del plazo legal de cinco días, como se muestra a continuación:

ACTO IMPUGNADO	JUICIO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PROMOVENTE
CEE/CG/102/2021 26 DE MARZO	JI-32/2021	29 de marzo	Mario Alberto Rodríguez Platas
	JI-33/2021	30 de marzo	Jessica Elodia Martínez Martínez
	JDC-127/2021	31 de marzo	Daniel Darío Pérez Cavazos

c) Legitimación. Los *Promoventes*, comparecen en calidad de candidatos registrados ante la *Comisión Electoral*.

d) Interés jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que, de resultar fundadas las alegaciones de la *Parte Actora*, se generaría la oportunidad de participar en debates.

e) Definitividad. Se tiene por satisfecho este requisito porque en la *Ley Electoral*, no existe otro medio de impugnación que deba agotarse previamente a la promoción de este juicio, para revocar o modificar el acto reclamado.

5. ESTUDIO DE FONDO

5.1. Planteamiento del caso

La *Comisión Electoral*, aprobó el acuerdo CEE/CG/102/2021, mediante el cual emitió los *Lineamientos de Debates*, en cumplimiento entre otras disposiciones legales, al artículo 153 párrafo segundo de la *Ley Electoral*.

En tales lineamientos la *Autoridad Responsable* señala entre otras cosas, que la *Comisión Electoral* organizará obligatoriamente **un** debate entre las personas postuladas a la Gubernatura del Estado por los Partidos Políticos y Coaliciones, y **seis** en donde participarán las y los candidatos registrados a Diputaciones Locales postuladas por partidos políticos y candidaturas independientes, estableciéndose las reglas para su desarrollo y participación.

En las demandas los *Promoventes*, esencialmente señalan lo siguiente:

- a) En los juicios de inconformidad, que la aplicación del artículo 153, párrafo segundo de la *Ley Electoral* es inconstitucional, puesto que les genera diversos agravios que violan sus derechos humanos y ocasionan inequidad en la contienda electoral en la que participan.
- b) En los juicios de la ciudadanía, que los artículos 5 y 8, de los *Lineamientos de Debates*, son inconstitucionales, pues limitan el ejercicio de contraste de ideas y posturas para la candidatura independiente sorteada, puesto que no podrán participar en un debate con las personas candidatas postuladas por los partidos políticos o coaliciones en su propio distrito electoral.

La **pretensión** de la *Parte Actora* es que se realicen debates en los distritos en los que contienden con los candidatos de los mismos distritos.

La **causa de pedir** la sustenta en que a su consideración la aplicación del párrafo segundo del artículo 153 de la *Ley Electoral* y de los artículos 5 y 8, de los *Lineamientos de Debates*, violenta sus derechos humanos relativos al principio *pro-homine*, al derecho de información, al derecho humano a ser votado y con ello se vulnera el principio de equidad y certeza en la contienda.

La **cuestión a resolver** consiste en determinar si el artículo 153, párrafo segundo de la *Ley Electoral* en el que se fundamenta el *Acuerdo Impugnado* y da vida a los numerales 5 y 8, de los *Lineamientos de Debates* se ajusta a las exigencias constitucionales, en las que descansa el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

6. Control Difuso de Constitucionalidad del Tribunal.

Para el estudio de los agravios expuestos por los *Promoventes*, resulta necesario fijar el marco normativo respecto al control de difuso de constitucionalidad que ejerce el *Tribunal*.

Los artículos 1 y 133, de la *Constitución Federal*, señalan que los jueces de cada entidad federativa están obligados a salvaguardar los derechos humanos

contenidos en la *Constitución Federal* y en los Tratados Internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior.

El pleno de la *Suprema Corte* ha señalado que existen dos vertientes dentro del modelo de control constitucional mexicano, uno de ellos es el control concentrado, el cual ejercen los órganos del Poder Judicial de la Federación, y el otro, el control que ejercen el resto de los jueces del país durante los procesos ordinarios en los que son competentes⁴.

También ha señalado la obligación de los jueces de preferir los derechos humanos contenidos en la *Constitución Federal* y en los Tratados Internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior y aun cuando no puedan hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la *Constitución Federal* y en los Tratados Internacionales, además señala que sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la *Constitución Federal* y en los tratados en la materia.⁵

En este sentido, la jurisprudencia fija los pasos a seguir en el control de constitucionalidad ex officio en materia de derechos humanos, y señala que los jueces deben realizar los siguientes pasos:

- a) Una interpretación en sentido amplio del orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la *Constitución Federal* y en los Tratados Internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas con protección más amplia;
- b) Una interpretación conforme en sentido estricto, que tendrá lugar cuando haya varias interpretaciones jurídicamente válidas; deberá llevarse a cabo partiendo de la presunción de constitucionalidad de leyes, y prefiriendo la

⁴ Véase la Tesis del Pleno de la *Suprema Corte* de rubro LXX/2011 (9a.) de rubro “**SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO**”. publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1; Pág. 557

⁵ Véase la Tesis del Pleno de la *Suprema Corte*, de rubro: **CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD**, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1, pág. 535.

interpretación que haga la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la *Constitución Federal* y los tratados internacionales para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y,

c) Inaplicación de la ley, cuando las alternativas no sean posibles.⁶

Conforme a lo expuesto, el control de convencionalidad *ex officio* no está limitado a las manifestaciones o actos de las partes, sino que puede ejercitarse por los órganos jurisdiccionales respecto de normas que, bien sea expresa o implícitamente, deban emplearse para resolver en algún juicio y que puedan ser contrarias a los derechos humanos.

En este sentido, la *Sala Superior* determinó en la Contradicción de Criterios SUP-CDC-8/2017 que los tribunales ordinarios del país, dentro de los cuales adscriben a los de materia electoral de los Estados de la República, cuentan con atribuciones, inclusive, para ejercer en su quehacer judicial un control difuso de constitucionalidad, lo cual permite tutelar los derechos fundamentales consagrados en la *Constitución Federal* y en los instrumentos internacionales de derechos humanos de forma efectiva, con el componente adicional de que, en virtud del asiento que cada tribunal tiene en las entidades, para los justiciables dicha protección se presenta de manera accesible, pronta, ordinaria y directa.

Bajo estas premisas se puede válidamente concluir que, con el nuevo modelo de constitucionalidad y convencionalidad, el *Tribunal* tiene facultades para llevar a cabo el análisis de constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas y, en su caso, inaplicarlas si concluye que son contrarias a la *Constitución Federal* y, además, cuenta con atribuciones suficientes para, en su caso, restituir el orden jurídico vulnerado mediante el dictado de la providencia necesaria.⁷

⁶ Véase la Tesis: P. LXIX/2011 (9ª.) del Pleno de la Suprema Corte, de rubro: **PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS**, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, pág. 552.

⁷ Véanse la sentencia dictada por la *Sala Superior* en el expediente identificado con la clave SUP-JRC-147/2013 y acumulados, así como la Tesis XXV/2013, de rubro: **ÓRGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES LOCALES. PUEDEN INAPLICAR NORMAS JURÍDICAS ESTATALES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A TRATADOS INTERNACIONALES**, que se consulta en el sitio oficial de la Dirección General de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta de ese órgano jurisdiccional, en la dirección electrónica <http://www.te.gob.mx/IUSEapp/>

7. Agravios.

A continuación, se expondrán los agravios formulados por los *Promoventes* de manera idéntica y, posteriormente, se identificarán los agravios que particularmente hacen valer en los juicios de inconformidad y el juicio de la ciudadanía.

7.1. Agravios formulados por la *Parte Actora*.

Los *Promoventes* hacen valer los mismos agravios que se enlistan a continuación:

Refieren que se vulnera el principio pro homine y el derecho humano de protección, respeto, garantía y prevención, porque se dejó de realizar una interpretación constitucional acorde al artículo 1 de la *Constitución Federal*, que establece que las personas gozarán de los derechos humanos, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse.

Argumentan que la porción normativa del párrafo segundo del artículo 153 de la *Ley Electoral*, al ser aplicada y reglamentada a través de los citados lineamientos restringe el derecho de participar, en un debate específico frente a las personas candidatas de los partidos que compiten en su mismo distrito electoral, sin una justificación válida y razonable.

Refieren que no se interpretó el marco jurídico vigente favoreciendo en todo el tiempo la protección más amplia, haciendo nugatorio el derecho a ser votado en condiciones de equidad, se dejó de cumplir con la obligación de todas las autoridades, incluida la administrativa, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos políticos electorales de los *Promoventes* de conformidad a los principios de universalidad, interdependencia, invisibilidad y progresividad.

Aducen que se vulnera el derecho humano de acceso a la información previsto en el artículo 6, de la *Constitución Federal*, ya que se afecta el derecho de los electores a elegir una opción política de manera informada.

También señalan que se afecta el derecho político-electoral de ser votado para ejercer el cargo de diputado local, toda vez que hace nugatorio la organización

de un debate obligatorio entre las candidaturas del distrito en el cual compiten, por lo que se obstaculiza el derecho de participar en los debates los cuales tienen como objeto proporcionar a la sociedad la difusión y confrontación de ideas, programas, plataformas electorales de las y los candidatos, por lo que se debió asegurar el más amplio ejercicio de la libertad de expresión garantizando condiciones de equidad y trato igualitario sin invisibilizar a los que históricamente han estado en esa situación de desventaja fáctica y jurídica.

Finalmente, argumentan que se contraviene la concepción de que los partidos políticos no son un fin en sí mismo, sino que su relevancia deriva del rol instrumental que tienen para la democracia, al permitir el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de modo que el diseño constitucional coloca a las personas en el centro de las normas y las instituciones.

7.2. Agravios formulados en los juicios de inconformidad.

Mario Alberto Rodríguez Platas y Jessica Elodia Martínez Martínez hacen valer de manera particular los siguientes motivos de agravio:

La *Autoridad Responsable* deja al arbitrio discrecional de las dirigencias de los partidos políticos, la decisión de designar a la persona candidata a una diputación local, que habrá de representar al conjunto de las demás candidaturas de los distritos electorales restantes en el debate obligatorio, en el que no participarán las candidaturas correspondientes al mismo distrito electoral, sino que los participantes podrán ser candidatos adscritos a diferentes distritos electorales.

Lo anterior, ya que, a su consideración, la responsable organizará otros cinco debates exclusivamente para los distritos electorales en donde exista una candidatura independiente, es decir, que se organizarán debates que invariablemente corresponderán a los distritos 3, 4, 5, 6, 12 y 18, excluyendo el resto de los distritos electorales, en donde si bien no hay candidaturas independientes sí concurren candidatos de partidos y coaliciones con diferentes propuestas específicas para las problemáticas de cada territorio, y dichas propuestas también son en función de la personalidad, experiencia profesional e historia de vida de cada persona candidata.

Además, señalan que se propicia una invisibilización de la agenda y propuesta de las personas candidatas que integran la comunidad *LGBTTTIQ+*, al no organizarse un debate exclusivo para los distritos electorales en los que participan, toda vez que fueron elegidos para cumplir con las acciones afirmativas para la diversidad sexual.

Lo anterior, señalan, se traduce en una discriminación motivada por la condición política que se agrava por las preferencias sexuales de quienes históricamente han tenido obstáculos en su derecho a participar en asuntos públicos, específicamente en participar en un debate organizado por la autoridad electoral, exclusivo para el ámbito territorial en el cual buscan convencer al electorado de obtener su voto.

Sostienen, que se afecta el derecho de la ciudadanía de elegir una opción política de manera informada, contrastando propuestas e ideas de los diferentes candidatos que se confrontan en un debate para estar en aptitud en su caso, de elegir una candidatura que represente a un grupo social que históricamente no ha tenido una representación política y que abiertamente asuma su preferencia sexual y, por tanto, oferte un plan de trabajo y propuestas específicas en beneficio de la comunidad *LGBTTTIQ+*.

Refieren, que se vulnera el derecho a ser votado, puesto que les propicia un daño irreparable a las personas candidatas abiertamente integrantes de la comunidad *LGBTTTIQ+* cuya aspiración es representar tanto a la sociedad en su conjunto, como en específico los intereses de las personas de la diversidad sexual.

Señalan, que con la aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, se obstaculiza y limita la participación de quienes ingresan a la contienda comicial gracias a las acciones afirmativas, pues se hace nugatorio un debate exclusivo para el distrito en el cual compiten.

De tal manera que, al **invisibilizarles** trae como consecuencia que carezcan de posibilidades reales para competir y eventualmente ganar la contienda comicial en razón de su particular condición de pertenecer a un grupo social (diversidad sexual) que históricamente no ha sido representado en el Congreso del Estado.

Es decir, se produce una vulneración a su derecho de ser votado y por otra se afecta el derecho de la ciudadanía a elegir una opción política abiertamente homosexual.

Además, señalan que se vulnera el principio de equidad en la contienda electoral y el principio de certeza, ya que en el caso de que la designación de los otros partidos políticos, recaiga en una o varias personas candidatas a los distritos a los que pertenecen, si ellos no resultaran designados por su partido para representarlo, se causará una afectación al principio de equidad en la contienda, pues los competidores que sí participen gozarán de una sobre exposición ante el electorado del distrito y quienes promueven se encontrarían en una situación de desigualdad frente a los candidatos del mismo distrito, que sí resulten elegidos para debatir en perjuicio del principio de certeza y equidad en la contienda.

Continúan diciendo, que la porción normativa y su aplicación resulta una medida desproporcionada e irracional en razón de que las acciones afirmativas a favor de la diversidad sexual buscan visibilizar y potenciar a las personas candidatas que, a diferencia de la mayoría de los demás candidatos, pertenecen a un grupo social políticamente vulnerable el cual no ha tenido una representación abiertamente homosexual.

Así, al organizar un debate en el que únicamente participen algunos candidatos que sean designados por las cúpulas partidistas, esto provoca una imposibilidad jurídica y fáctica para que quienes promueven tengan la oportunidad de estar ante sus adversarios en el mismo ámbito territorial y estar en igualdad de condiciones para presentar sus propuestas, programas, plan de trabajo y dar a conocer su ideología política.

7.3. Agravios formulados en el juicio de la ciudadanía.

Por su parte, Daniel Darío Pérez Cavazos, refiere los siguientes motivos de disenso:

El artículo 5, de los *Lineamientos de Debates*, imposibilita a las personas candidatas independientes para debatir directamente con los candidatos de los

partidos del mismo distrito electoral.

Lo anterior, porque al establecer que una de las candidaturas independientes a diputación local participará en un debate sorteado con representantes seleccionados por cada partido político, el acuerdo limita el ejercicio de contraste de ideas y posturas para la candidatura independiente sorteada, puesto que no podrán participar en un debate con las personas candidatas postuladas por los partidos en su propio distrito electoral.

Además, aduce que se realizó una discriminación motivada por la condición política de los candidatos independientes de decidir participar por esa vía y no por la vía de los partidos políticos, para el cargo a diputado local, y que la posibilidad de ejercer el derecho a participar en un debate entre sus contrincantes directos, representa la misma oportunidad de ser votado en igualdad de condiciones.

Señala, que afecta el derecho de la ciudadanía de elegir una opción política de manera informada, que compita fuera del esquema tradicional de los partidos políticos, y se pierde la oportunidad de contar con un debate frente a los contrincantes directos, al solo competir frente a los representantes que designen los partidos, sin que necesariamente compitan por el mismo distrito.

Lo anterior, desde su óptica, puede provocar confusión, en hacer creer que las candidaturas independientes operan bajo las mismas reglas de los partidos políticos o que todas las candidaturas independientes comparten el mismo programa o plan de trabajo, propuestas y la ideología política lo cual genere efectos negativos en la opinión pública.

Refiere, que se vulnera el derecho a ser votado, puesto que les propicia un daño irreparable a las personas que aspiran a un cargo de elección popular como lo es una diputación local por la vía de la candidatura independiente, puesto que limitar la oportunidad de tener un debate frente a las personas candidatas de los partidos políticos, que compiten por el mismo distrito electoral trae como consecuencia, carecer de posibilidades reales de competir y eventualmente ganar la contienda electoral.

En este sentido, considera que se produce una afectación a la equidad en la contienda, para la candidatura independiente sorteada para el debate general, al evitar su participación en un debate frente a las demás personas candidatas en el mismo distrito electoral por el que compiten.

Argumenta que la porción normativa y la decisión de aplicarla y reglamentarla resulta una medida desproporcionada e irracional, en razón de que una de las características de las candidaturas independientes es la independencia que existe con otras y con los partidos mismos, por lo que la definición de que la persona candidata independiente sea sorteada para el debate con sus contrincantes directos, provoca una imposibilidad jurídica y fáctica para estar en igualdad de condiciones para presentar sus propuestas, programas, plan de trabajo y dar a conocer su ideología política.

Precisado lo anterior, el *Tribunal* analizará los planteamientos de los *Promovientes* tanto en lo individual por medio de impugnación, como de forma conjunta dada la estrecha relación que guardan entre sí, sin que ello les ocasione perjuicio alguno. Lo anterior, en términos de lo señalado en la jurisprudencia 4/2000, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.⁸

7.4. Se inaplican al caso concreto el párrafo segundo del artículo 153, de la Ley Electoral y, en vía de consecuencia, los artículos 5 y 8, de los Lineamientos de debates por ser contrarios a la Constitución Federal

Como ya se expuso, en los juicios de inconformidad, se denuncia la inconstitucionalidad tanto del artículo 153, párrafo segundo de la *Ley Electoral*, como de los artículos 5 y 8, de los *Lineamientos de Debates* los cuales fueron aprobados por la *Comisión Electoral* mediante acuerdo CEE/CG/102/2021 el pasado veintiséis de marzo.

Lo anterior, porque los *Promovientes* de los juicios JI-32/2021 y JI-33/2021 aducen que la reglamentación y aplicación de la porción normativa de la *Ley*

⁸ Consultable en la siguiente liga <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=04/2000>

Electoral, que dan vida a los artículos de los Lineamientos señalados, generan los agravios precisados en la presente sentencia.

Al respecto, el *Tribunal* determina que los agravios expresados son sustancialmente **fundados**, por las razones que se esgrimen a continuación.

El párrafo segundo del artículo 153, de la *Ley Electoral* señala que:

*“La Comisión Estatal Electoral deberá organizar un debate entre los candidatos a Gobernador, y cada Comisión Municipal Electoral, entre los candidatos a Presidente Municipal. **Por lo que hace a los candidatos a Diputado, cada partido político o coalición designará como representante a un candidato a Diputado, a efecto de que éstos participen en un debate obligatorio organizado por la Comisión Estatal Electoral.** En el caso de los Candidatos Independientes a Diputados Locales, la Comisión Estatal Electoral sorteará entre éstos a quien deba participar en el debate correspondiente”.*

En observancia a esta disposición legal, y en ejercicio de su facultad reglamentaria la *Autoridad Responsable* diseñó los *Lineamientos de Debate* y estableció en los artículos 5 y 8, lo siguiente:

(...)

Artículo 5. La Comisión Estatal Electoral organizará obligatoriamente un debate entre las personas postuladas por los partidos políticos y coaliciones para la elección a la Gubernatura del Estado y seis debates para la elección de las Diputaciones Locales, entre las candidaturas de los partidos políticos y candidaturas independientes.

En el caso de los seis debates a la elección de Diputaciones Locales, se efectuarán de acuerdo a lo siguiente:

1. Un debate obligatorio se efectuará entre las candidaturas designadas por cada partido político y la sorteada entre las candidaturas independientes.

En el caso de las candidaturas independientes la Comisión Estatal Electoral sorteará entre estos a quien deba participar en este debate. El mismo se llevará a cabo asegurando la paridad de género, por lo cual se organizará un sorteo para asignar el género con el que deberá participar cada partido político. Los partidos políticos podrán designar candidaturas que hayan sido postuladas en la

coalición que en su caso integren, siempre y cuando sean las correspondientes a su origen partidario, de conformidad con lo establecido en el convenio respectivo.

*II. Los cinco debates restantes, se realizarán entre las candidaturas correspondientes a los distritos electorales al que pertenezcan las demás candidaturas independientes que no resultarán sorteadas conforme a la fracción anterior. **Solo tendrá derecho a participar en este debate las candidaturas de cada partido político, así como las candidaturas independientes, que correspondan al distrito de estos últimos.***

Es obligación de cada una de las Comisiones Municipales Electorales, organizar obligatoriamente un debate entre las candidatas y los candidatos registrados a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento correspondiente.

(...)

Artículo 8. Los debates correspondientes a los cargos para las Diputaciones Locales, Gubernatura y presidencias Municipales de los Ayuntamientos, deberán realizarse a más tardar el 22 de mayo de 2021, conforme a lo estipulado en el artículo 153 de la Ley Electoral”

(...)

De la lectura de los preceptos normativos citados, se puede concluir que la participación en los debates de Mario Alberto Rodríguez Platas y Jessica Elodia Martínez Martínez, depende esencialmente de dos factores:

- 1) Que sean elegidos por sus partidos o coalición para debatir con candidatos de otros distritos, que no necesariamente corresponderán al distrito en el que compiten.
- 2) Que en el distrito que compiten exista una candidatura independiente.

Ante estas dos premisas, se debe señalar que en el *Acuerdo Impugnado* se establece que en el actual proceso electoral participan seis candidatos independientes en los distritos **tercero, cuarto, quinto, sexto, décimo segundo y décimo octavo**; sin embargo, Mario Alberto Rodríguez Platas y Jessica Elodia Martínez Martínez son candidatos de la coalición “Va Fuerte por Nuevo León” y

del partido político Morena, en los distritos **vigésimo y décimo cuarto**, respectivamente.

En virtud de lo anterior, se puede advertir que, al no coincidir el distrito en el que contienden candidaturas independientes, sus posibilidades de participar en un debate y, por consiguiente, exponer su oferta política ante el electorado de su distrito se reducen significativamente, pues solo se limita a la posibilidad de ser elegidos por sus partidos políticos.

Ahora bien, no pasa desapercibido para el *Tribunal*, que la actora y el actor señalados, participan en el actual proceso electoral, como resultado de las acciones afirmativas implementadas por la *Autoridad Responsable* en cumplimiento a la sentencia JDC-33/2021 y acumulados, emitida por este órgano jurisdiccional, en el que se ordenó garantizar el acceso a las personas de la comunidad *LGBTTTQI+* a los cargos de elección popular para el proceso electoral 2020- 2021.

Lo anterior, se acredita con lo establecido en los acuerdos CEE/CG/062/2021 y CEE/CG/094/2021 queda establecido que las fórmulas de los distritos vigésimo y décimo cuarto se encuentran conformadas por personas que se auto adscribieron como parte de dicha comunidad, dando cumplimiento a la acción afirmativa ordenada.

Al respecto, se debe señalar que, para ***juzgar casos de identidad de género, orientación o diversidad sexual***, también surge la obligación a realizar el mismo ejercicio consistente en identificar estereotipos de género o de sexualidad sobre las personas, esto es, identificar y desechar las preconcepciones que se tienen de las personas, por virtud de su identidad o expresión de género o bien, de su orientación sexual.

Bajo ese contexto, quienes impartimos justicia estamos obligados a resolver los casos relativos a los derechos humanos de las personas *LGBTTTQI+*, con base en una ***perspectiva de género***, que incluye tener especial cuidado en aquellos que involucran cuestiones relacionadas con la diversidad sexual. Esto es, partiendo de una perspectiva que considere la realidad particular que viven las

personas por virtud de su identidad de género y orientación sexual, a efecto de materializar los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación.⁹

De tal forma que existe la obligación por parte del *Tribunal* de garantizar condiciones de igualdad para que las personas de la comunidad *LGBTTTQI+* puedan tener acceso a los cargos de elección popular para el proceso electoral 2020- 2021.

En este contexto, se trae a la vista la opinión de la *Sala Superior* en el expediente relativo a la Acción de Inconstitucionalidad 38/2014, y sus acumuladas 91/2014, 92/2014 y 93/2014, relativa a la inconstitucionalidad del artículo 153, párrafo segundo de la Ley Electoral, a solicitud de la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, el veinticinco de agosto de dos mil catorce.

Cabe precisar que en la votación de esta Acción de Inconstitucionalidad alcanzó un empate de cinco votos respecto de la propuesta del proyecto y en ninguno de los puntos logró la mayoría de ocho para la validez, por lo que se desestimó la inconstitucionalidad de la norma combatida.

Sin embargo, de acuerdo al criterio del *Tribunal* en los expedientes JI-107/2018 y JI-109/2018 acumulados, se señaló que dicha causa dejaba intacta la constitucionalidad de la norma para que cada juzgador haga el control concentrado o difuso, según sea el caso, como en el caso actual acontece.

Precisado lo anterior, se trae a la vista lo establecido en la referida opinión, en ella la máxima autoridad electoral consideró, que la porción normativa relativa al párrafo segundo del artículo 153 de la *Ley Electoral*, que regula la realización de debates entre candidatos a diputados locales, no es conforme a la *Constitución Federal*, por las siguientes razones.

Señaló que, los principios de certeza y equidad en los procesos electorales, son valores fundamentales previstos en los artículos 41 y 116 de la *Constitución*

⁹ Criterio sostenido en la sentencia SCM-JDC-421/2021

Federal, por lo que, todas las normas de carácter electoral deben ajustarse al contenido sustancial de dichos principios.

Precisó que, dicho ajuste implica que las diversas fases y actividades que se desarrollan en las elecciones, deben atender objetivamente a parámetros que permitan una contienda justa y equitativa entre los candidatos, los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, con miras a obtener resultados óptimos que reflejen con la mayor exactitud posible la voluntad ciudadana.

Refirió que, en el desarrollo e instrumentación de figuras reguladas jurídicamente, como son los debates, se deben observar reglas que garanticen la discusión de ideas, la libertad de expresión y la información a la sociedad sobre los contenidos esenciales de las diversas posturas políticas; sin embargo, éstas deben ajustarse en todo momento a los principios constitucionales aludidos.

Por lo tanto, indicó que no es correcto que, al amparo de la realización de esas actividades, se generen circunstancias o situaciones que puedan generar inequidad en la contienda electoral, ya sea privando de las mismas oportunidades a los candidatos y partidos, o bien, propiciando la focalización de la atención del electorado en tan solo algunas elecciones.

De ahí que, consideró que la norma encargada de regular los debates para las elecciones de diputados locales en el Estado, si bien persigue un fin legítimo, no resulta idónea.

Lo anterior, explicó, ya que la disposición estipula que cada partido político o coalición designará como representante a un candidato a diputado, a efecto de que participen en un debate obligatorio organizado por la *Comisión Electoral*, en tanto que, respecto a los candidatos independientes, asistirá al citado debate aquel que resulte sorteado.

En torno a esa regla, formuló tres objeciones respecto a su idoneidad, las cuales se citan textualmente:

“a) Pese a que todos los candidatos de un partido político o coalición compitan bajo una misma plataforma electoral, lo cierto es que no tienen presentes las problemáticas y circunstancias particulares de cada uno de los distritos electorales.

Luego, si la finalidad de los debates es que la ciudadanía conozca a fondo las propuestas de los candidatos, así como las posibles soluciones a las diversas problemáticas que aquejan a la comunidad, es claro que la organización de un debate a la que previsiblemente acudirán candidatos de distintos distritos, sólo posibilita la discusión de temas que impactan al Estado y no a los sectores específicos que elegirán a un representante ante el órgano legislativo.

Además, tratándose de candidatos independientes, éstos no adquieren una plataforma electoral, programa de acción o propuesta común, lo que torna aún más arbitrario y desigual que sólo uno de ellos puede acudir al debate, a través de un procedimiento de selección aleatorio.

b) La participación de sólo un candidato por cada partido político y coalición, así como de aquel que representa a los candidatos independientes, genera una exposición mediática y una influencia importante sobre el electorado, a la cual no tendrán acceso el resto de los candidatos.

Lo anterior, porque el mecanismo de elección y designación previsiblemente enfrentará a candidatos de distritos distintos. Luego, es obvio que aquellos candidatos del mismo distrito que no tuvieron la oportunidad de asistir, se encontrarán en desventaja frente aquel o aquellos que sí pudieron hacerlo.

En ese tenor, dado que uno de los principios fundamentales incorporados en la reforma constitucional y legal de 2007-2008, consistió en el acceso equitativo a tiempos en radio y televisión, la regla prevista por el legislador local rompe con esa lógica, al institucionalizar un trato desigual entre los candidatos a diputados locales.

c) Finalmente, no existe razón alguna para que en todas las elecciones municipales se lleven a cabo debates entre los candidatos a presidentes municipales, en tanto que, tratándose de la integración del Congreso local, sólo se efectúe uno en representación de todos los distritos.”

Con base en esas razones, la *Sala Superior* estimó al emitir su opinión que la medida contenida en la porción normativa es contraria a la *Constitución Federal*,

al apartarse del principio de equidad que debe imperar en los procesos electorales.

Ante los razonamientos desarrollados en la opinión sustentada por la *Sala Superior*, cuyos argumentos comparte y hace suyos el *Tribunal*, se considera que no fue correcta la apreciación de la *Comisión Electoral* al fijar la dinámica de participación de las candidaturas a las diputaciones locales, con base en el artículo 153, párrafo segundo de la *Ley Electoral*.

Esto es así, pues como quedó demostrado, la porción normativa cuestionada por los promoventes, no resulta idónea, pues genera inequidad en la contienda.

Ante estas circunstancias, lo procedente es declarar la inaplicación al caso concreto de la porción normativa prevista en el 153 párrafo segundo de la *Ley Electoral* consistente en:

“Por lo que hace a los candidatos a Diputado, cada partido político o coalición designará como representante a un candidato a Diputado, a efecto de que éstos participen en un debate obligatorio organizado por la Comisión Estatal Electoral.”

En vía de consecuencia y toda vez que los artículos 5 y 8, de los *Lineamientos de Debates* guardan estrecha relación con la porción normativa inaplicada también se declara su inaplicación al caso concreto.

En cuanto al artículo 8, solo se inaplica la porción normativa que refiere lo siguiente: ***“conforme a lo estipulado en el artículo 153 de la Ley Electoral”***

En consecuencia, al declararse **fundados** los agravios de la y el actor por las razones expuestas y al inaplicar las porciones normativas señaladas, la *Autoridad Responsable* debe garantizar y realizar lo necesario a efecto de que la y el actor debatan con las candidaturas que se encuentren postuladas en su distrito, sin que se encuentren sujetas al arbitrio o decisión de la coalición y el partido político que los postularon; esto, dado que el *Tribunal* considera que no es suficiente que se implementen acciones afirmativas en favor de grupos minoritarios e

invisibilizados históricamente, para que sean postulados a cargos de elección popular, sino que, es necesario que participen en condiciones de igualdad para que su posibilidad de acceder a dichos cargos, sea real.

7.5. Los candidatos independientes deben debatir con candidaturas del mismo distrito electoral en el que contiendan.

Ahora bien, en el juicio de la ciudadanía JDC-127/2021, el actor solo se agravia de la aplicación del artículo 5 de los *Lineamientos de Debates*, el cual a su consideración le genera diversos agravios expuestos en el apartado correspondiente.

Entre dichos disensos, esencialmente se duele del sorteo que realizarán de manera obligatoria para debatir con candidaturas designadas por cada partido político con candidatos que no pertenezcan al distrito electoral en el que contienden.

Aun cuando el *Tribunal* advierte que, las seis candidaturas independientes participantes en este proceso electoral, tienen asegurada su participación en los debates que organizará la *Comisión Electoral*, el hecho de que uno de ellos debata en condiciones de desigualdad con candidatos que no son de su distrito, resulta suficiente para estudiar sus agravios.

Ahora bien, resulta necesario señalar que, a través de los informes circunstanciados rendidos por la *Autoridad Responsable*, mediante los oficios DJ/CEE/563/2021 se advierte que el sorteo del cual se agravia, se realizó el pasado primero de abril, en cuyo resultado fue designado el promovente, candidato independiente por el Décimo Segundo Distrito Electoral, por lo tanto, participará en el sorteo obligatorio, con candidatos de partidos que no necesariamente corresponderán a su distrito.

En este contexto, se advierte que le genera agravio el debatir con candidatos de partidos que no le corresponden a su distrito, pues la problemática social no es la misma en todos los distritos, y son precisamente las propuestas de solución de problemas por parte de los y las candidatas lo que genera confianza en el electorado y lo que eventualmente decide qué candidato obtiene el triunfo.

Ante ello, ha sido criterio del *Tribunal* que en atención al artículo 1º de la *Constitución Federal*, las autoridades electorales, al aplicar e interpretar las disposiciones relativas a las candidaturas independientes, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el derecho de la ciudadanía a acceder a los cargos representativos, a través de la figura de la candidatura independiente.

Lo cual implica garantizar a tales candidaturas condiciones de igualdad en su participación en el proceso electoral, en relación con las candidaturas de los partidos políticos y el resto de las independientes.

Lo anterior, también significa que los juzgadores electorales deben, a través de la interpretación de las disposiciones aplicables y conforme con las circunstancias particulares de cada caso, remover todos aquellos obstáculos de hecho o de derecho que impiden lograr esa participación efectiva de las candidaturas independientes en condiciones de igualdad, para que puedan tener un acceso real a los órganos de representación.¹⁰

En este sentido, resulta necesario señalar que aun cuando en el juicio de la ciudadanía no denuncia la inconstitucionalidad del artículo 5, de los *Lineamientos de Debates*, lo cierto es que este *Tribunal* ya determinó su inaplicación al caso concreto en la presente ejecutoria; por tanto, sus efectos le resultan aplicables al actor del JDC-127/2021. De tal forma que la inaplicación de dicho precepto también debe beneficiarle.

Lo anterior, trae como resultado que la *Autoridad Responsable* también debe garantizar y disponer lo necesario a efecto de que dicha candidatura debata con candidatos postulados en su mismo distrito electoral, máxime que los tiempos establecidos en el calendario electoral aprobado por la Comisión Electoral, permite implementar las modificaciones respectivas para garantizar los derechos humanos vulnerados.

¹⁰ Así lo estableció la Sala Superior al resolver el expediente SUP-JDC-50/2018 y el tribunal en el expediente JDC-92/2020

En consecuencia, al resultar fundados los agravios de la parte actora, procede revocar el *Acuerdo Impugnado* en lo que fue materia de impugnación.

Conforme a lo expuesto en esta ejecutoria, procede establecer los efectos siguientes:

8. EFECTOS.

8.1. Se **revoca** lo que fue materia de impugnación el Acuerdo **CEE/CG/102/2021**, en lo relativo al debate de diputaciones locales.

8.2. Se **inaplica al caso concreto** el párrafo segundo del artículo 153 de la *Ley Electoral*, en cuanto a la porción normativa consistente en “**Por lo que hace a los candidatos a Diputado, cada partido político o coalición designará como representante a un candidato a Diputado, a efecto de que éstos participen en un debate obligatorio organizado por la Comisión Estatal Electoral.**”

8.3. En vía de consecuencia, se **inaplica con efectos particulares** al caso concreto el artículo 5 de los *Lineamientos de Debates*.

8.4. Se **inaplica con efectos particulares** al caso concreto el artículo 8 de los *Lineamientos de Debates* solo en la porción normativa que refiere “**conforme a lo estipulado en el artículo 153 de la Ley Electoral**”.

8.5. Se **ordena** a la *Comisión Electoral* que **organice los debates** correspondientes a la elección de Diputaciones Locales, en los distritos décimo segundo, décimo cuarto y vigésimo, en términos de la presente sentencia.

9. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se **sobresee** respecto de los juicios de la ciudadanía **JDC-125/2021** y **JDC-126/2021**; en términos de lo razonado en el apartado **3** de esta sentencia.

SEGUNDO. Se **revoca**, en la materia de impugnación, el acuerdo reclamado.

TERCERO. Se **inaplican** al caso concreto, los artículos 153, párrafo segundo de la *Ley Electoral*; 5 y 8, de los Lineamientos de Debates, en las porciones normativas precisadas en este fallo.

CUARTO. Se **ordena a** la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León que proceda en los términos señalados en el apartado “**8. EFECTOS**” de esta ejecutoria.

NOTIFÍQUESE como en Derecho corresponda.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación respectiva a la responsable.

Así lo resolvieron por **UNANIMIDAD** de votos, la Magistrada y los Magistrados que integran el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en sesión pública celebrada el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, **formulando voto particular adhesivo el Magistrado CARLOS CÉSAR LEAL ISLA GARCÍA**, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado **ARTURO GARCÍA ARELLANO**, quien autoriza y da fe.

RÚBRICA
LIC. CLAUDIA PATRICIA DE LA GARZA RAMOS
MAGISTRADA PRESIDENTA

RÚBRICA
MTRO. JESÚS EDUARDO BAUTISTA PEÑA
MAGISTRADO

RÚBRICA
LIC. CARLOS CÉSAR LEAL ISLA GARCÍA
MAGISTRADO

RÚBRICA
LIC. ARTURO GARCÍA ARELLANO
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

VOTO PARTICULAR ADHESIVO QUE FORMULA EL MAGISTRADO CARLOS CÉSAR LEAL ISLA GARCÍA, RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN LOS JUICIOS DE INCONFORMIDAD Y JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE

**LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO CON CLAVE
JI-032/2021 Y ACUMULADOS**

En términos de lo dispuesto en la fracción "II" del artículo 316 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, expongo mi voto adhesivo, pues considero pertinente exponer mi posicionamiento diferenciado respecto al tratamiento que se da al sobreseimiento de los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano con claves JDC-125/2021 y JDC-126/2021.

En la especie, coincido en que debe decretarse el sobreseimiento de los juicios identificados con los números 125 y 126, sin embargo, tal conclusión no responde a que se colme la pretensión de las partes promoventes, sino a que no se desprende una afectación sustancial en sus derechos.

Por otra parte, estimo que la legislación local regula de manera completa los alcances de los puntos resolutiveos que se dictan en una sentencia, sin que sea el caso acudir a lo previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así las cosas, conforme a lo previsto en la fracción "V" del artículo 315 de la Ley Electoral en el Estado, advierto que una determinación que decide no resolver el juicio, no concurre con las finalidades de un punto resolutiveo, y, por lo tanto, lo conducente era decretar el sobreseimiento en un apartado especial de la sentencia y no en los puntos resolutiveos.

En términos de lo expuesto, reitero mi voto adhesivo.

La sentencia que antecede se publicó en la lista de acuerdos de este Tribunal el veintiuno de abril de dos mil veintiuno. - Conste. **Rúbrica**